

OPINIÓN

Más audacia

El plan contra el fraude fiscal debería aumentar la inspección en las grandes vetas de dinero negro

EL PLAN Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y de Seguridad Social que ayer anunció el Gobierno parece que se ha diseñado para aumentar la información disponible sobre las bolsas de fraude tributario y laboral y no para intensificar directamente la investigación de personas o empresas con indicios de evasión. El anuncio de ese plan al término del Consejo de Ministros pecó de vaguedad. De las 60 medidas que lo componen, apenas se mencionaron con cierto detalle la utilización compartida de la información disponible en la Agencia Tributaria, en la Seguridad Social y en la Inspección de Trabajo, la posibilidad de crear una comisión mixta con las tres instituciones, una intensificación de la cooperación internacional para combatir los paraísos fiscales o acuerdos con organizaciones sectoriales para que faciliten información relevante para la Inspección.

Los esfuerzos de coordinación informativa son beneficiosos, qué duda cabe. No es posible oponerse a que la Agencia Tributaria intercambie información con otros organismos del Estado; y un foro con grandes empresas que se encargue de resolver las dudas tributarias reducirá los conflictos legales de la Agencia Tributaria. Pero, aunque se eluda la cuestión de por qué no se buscó antes esta colaboración, queda en pie el hecho de que el plan parece poco ambicioso y rutinario. La economía española presenta en estos momentos un déficit público próximo al 12% del PIB y, según las estimaciones más moderadas, sufre un

volumen de economía sumergida del 23,3% del PIB. La persecución del fraude y la reducción de la economía negra deberían ser consideradas como fuentes prioritarias de ingresos; con la ventaja adicional de que recaudar parte de ese dinero negro aliviaría la urgencia de subir impuestos para estabilizar las finanzas públicas.

Desde esta perspectiva, el objetivo del plan (aumentar en 1.000 millones de euros los ingresos en 2013) es tímido; no resuelve, ni en poco ni en mucho, la debilidad estructural de los ingresos públicos. La cortedad del plan sugiere que la Agencia proseguirá por la senda rutinaria de la inspección a los contribuyentes mejor o peor censados: autónomos, asalariados y pequeñas y medianas empresas. Pero no es ahí donde se da mayor probabilidad de éxito para encontrar las grandes vetas del fraude, sino en las sociedades instrumentales o en las grandes fortunas y corporaciones. Da la sensación de que la Agencia Tributaria no se atreve a buscar en esas zonas de sombra, bien por el riesgo de conflictos, bien porque carece de los medios suficientes para ello.

La precaria situación de las finanzas públicas exige un plan contra el fraude más contundente; es decir, que tenga efectos inmediatos y que al menos consiga recuperar cada año 6.000 millones de euros más de los bolsillos de los evasores fiscales. El coste político de subir impuestos debería ser incentivo suficiente para que el Gobierno se tome el fraude fiscal como lo que es: un grave problema de Estado.

Encrucijada iraquí

Las elecciones de mañana son una oportunidad histórica para salir del violento marasmo sectario

EN LA vorágine de la violencia sectaria que sigue sacudiendo Irak —aunque sus cenitales de muertos mensuales sean sólo una fracción de los del apogeo de su guerra civil—, las elecciones legislativas de mañana corren el riesgo de perder una buena parte de su importancia. La trascendencia de estos comicios, sin embargo, deriva no sólo de la esperanza de que la política, por rudimentaria que sea, sustituya a la sangre; o del hecho de que las tropas de combate estadounidenses estén a punto de comenzar su retirada escalonada de Irak. Quizá su argumento más decisivo sea su misma celebración: el hecho de que un Gobierno representativo emerja en un país árabe tras una votación que pueda ser percibida como relativamente libre y limpia.

Irak, aniquilado por décadas de tiranía y guerras, ocupado y fragmentado, de instituciones inexistentes o corrompidas, sigue siendo un rompecabezas étnico y religioso, donde casi cada querrela tiene asiento y ningún dirigente ni partido aglutina suficientes apoyos. Hay millones de personas desplazadas, la supuesta reconciliación nacional está por venir y permanecen sin resolver cuestiones tan decisivas como el reparto del poder político y territorial o la gestión del petróleo.

El gran interrogante de unos comicios que esta vez sí disputa la minoría suní, a diferencia de 2005, es si se producirá una intersección de intereses entre la mayoría chií y los suníes, por tangencial que sea, que permita un Gobierno de amplio espectro, a diferencia del actual de Nuri al Maliki. Expectativa ésta alentada por la improbabilidad de que alguna de las alianzas en liza obtenga la mayoría del Parlamento de 325 escaños; y de que, en consecuencia, los autónomos kurdos vuelvan a erigirse en árbitros de la gobernabilidad. Los resultados de la coalición secular del ex primer ministro Iyad Allawi, que integra a partidos de las dos grandes confesiones, serán en este sentido un buen indicio de hasta qué punto el cambio puede llegar a Bagdad siete años después del derrocamiento de Sadam Husein.

La formación de Gobierno en Irak será presumiblemente un proceso largo, dificultoso y violento. Que los nuevos dirigentes sean capaces de romper de una vez la espiral cristalizada de fanatismo religioso y clientelismo político es una condición indispensable para que el atormentado país árabe alumbré la esperanza en toda una región.

EL ROTO



EL ACENTO

Jóvenes, a conducir

Hay que rendirse a la evidencia y admitir que los jóvenes, al igual que dan sopas con ondas al resto en el mundo virtual, resulta que también manejan los automóviles con mayor maestría y, sorpresa, con creciente prudencia. Estos gloriosos años en los que la jerarquía paterna jamás queda en entredicho dentro del coche tienen sus días contados. Los padres, al asiento posterior, que ya se ocuparán los retoños de llevarlos a buen puerto. Las estadísticas son inapelables y a los mayores les toca, una vez más, dar un paso atrás, y no es una metáfora.

La Dirección General de Tráfico baraja la posibilidad de permitir a los jóvenes de 17 años que empiecen a conducir, siempre que un veterano les ceda los mandos y viaje con ellos ejerciendo de tutor y profesor. El sistema copiaría a los que ya hay en otros países (Estados Unidos, Suecia, Francia o Bélgica).

Se ha demostrado que cuanto antes empiezan los jóvenes a conducir, mejores hábitos adquieren. Así que España no tardará mucho en introducir esta medida, que mejorará aún más nuestra seguridad vial.

El sistema es antiguo en este país. ¿Quién no ha conducido un coche en un descampado de la mano de un conductor experto mucho antes de matricularse en una autoescuela? De introducirse esta nueva medida ya no habrá que buscar un lugar apartado y la práctica será legal. Sólo se

requeriría la aprobación previa del examen teórico, donde nuevamente la informática es una buena herramienta de estudio que los chavales hace tiempo descubrieron, y la paciencia y generosidad de un experimentado piloto de currículo immaculado para desvelar al neófito los secretos del doble embrague.

Las nuevas normas de la DGT y su política general han logrado reducir la siniestralidad española en carretera a niveles históricos. Pero resulta que son los jóvenes los que más se están aplicando la lección. En los últimos seis años se ha reducido el número de muertos por accidente un 64% entre los menores de 24 años. O los mayores se ponen las pilas o su destino quedará reducido a ser ocasional profesor de autoescuela. Sin sueldo.



MARCOS BALFAGÓN